

Chillán, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

En antecedentes **RIT N° 65-2020, RUC N° 1800779576-5**, se ha deducido por don Iván Francisco Rodríguez Mella, Defensor Penal Público, en representación de **JESUS ANTONIO MALDONADO SEGUEL**, recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha treinta y uno de agosto de 2021 por la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, integrada por las juezas titulares doña Olga Fuentes Ponce, quien la presidio, y doña Mariá Paz González González, que condenó a su representado como autor de cuatro delitos delito de robo con en lugar no habitado, (tres de ellos consumados y uno frustrado), a la pena única de **OCHO AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO**, además a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, perpetrados los días 13 de agosto de 2018, 16 de agosto de 2018 y 22 de agosto de 2018 en la comuna de Chillán, y el día 22 de octubre de 2018 en la comuna de Chillán Viejo, este último en grado de frustrado, cometidos en perjuicio de Paola Nuñez Inzunza, Soledad Inzunza Moya, Carlos Saavedra Laviñ y de la empresa Minera y Comercializadora Sudamericana Ltda., respectivamente.

Comparece, asimismo, doña Daphne Barrera Molina, Defensora Penal Pública, en representación de **RODRIGO ANDRES QUIROZ CACERES**, quien interpone recurso de nulidad en contra de la misma sentencia definitiva, en virtud de la cual se condenó a su representado a la pena de **CINCO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO**, además a las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en su calidad de autor de tres delitos de robo en lugar no habitado, perpetrados en Chillán los días 13 de agosto de 2018 y 16 de agosto de 2018, y en la comuna de Chillán Viejo el día 22 de octubre de 2018, en perjuicio de Paola Nuñez Inzunza, Soledad Inzunza Moya y de la empresa Minera y Comercializadora Sudamericana Ltda., respectivamente.



Ambos defensores fundan sus recursos de nulidad en la causal prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo legal.

Siendo declarados admisibles los recursos por esta Corte, se procedió a su vista en la audiencia del día trece de octubre último, donde se escucharon los argumentos de las Defensas y del Ministerio Público, señalándose para la lectura del fallo el día de hoy, a las 10 horas.

OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONDIDERANDO:

Primero: Que la causal de nulidad en que se fundamentan los recursos interpuestos por las defensas de los condenados es aquella prevista en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, por haberse omitido en la sentencia algunos de los requisitos previstos en el artículo 342 letra c), en relación al artículo 297 del mismo cuerpo legal.

El artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal establece: "Motivos absolutos de nulidad. El juicio y la sentencia serán siempre anulados: e) cuando, en la sentencia se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 342 letras c), d) o e). Por su parte, el artículo 342 del mismo Código en su letra c) señala que: "Contenido de la sentencia. La sentencia definitiva contendrá: c) La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297".

A su turno, el artículo 297 del citado Código Procesal Penal dispone en primer lugar, la facultad que tienen los tribunales de apreciar la prueba con libertad, lo que permite hacer una valoración de los antecedentes de juicio con mayor flexibilidad, puesto que el legislador no ha consignado en cada caso límites en dicha ponderación, la única exigencia que se establece para tal raciocinio será la de no contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Además, dicha disposición impone el deber del juzgador de hacerse cargo de toda la prueba producida en el juicio y por último, también se impone que en la valoración de la prueba, en la sentencia, se deba especificar el o los medios de prueba mediante los cuales se dieron por



acreditados cada uno de los hechos y circunstancias, lo que permitirá la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones. Esta exigencia se ha concretado en la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, cuando se especifica como uno de los requisitos de la sentencia el que ésta contenga la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297.

Segundo: Que la defensa de **JESUS ANTONIO MALDONADO SEGUEL**, sostiene que el problema en cuestión se produce en la forma en que el tribunal llegó al cálculo de pena en el considerando décimo tercero, el cual transcribe:

“DECIMO TERCERO: Penalidad. Que, el delito de robo en lugar no habitado, previsto y sancionado en el artículo 442 del Código Penal, tiene asignada la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo, pena que se extiende desde los quinientos cuarenta y un días a cinco años.

1) Respecto de Jesús Antonio Maldonado Seguel. Cabe mencionar que este encartado resultó condenado como autor de cuatro delitos de robo en lugar no habitado, tres en grado de consumado y uno en grado de frustrado. También dable es indicar que le perjudica la agravante del artículo 12 N° 16 del Código Penal, respecto de todos los hechos, beneficiándole la atenuante del 11 N° 9 del Código Penal, solo respecto de los hechos singularizados como hecho 1 y hecho 2 materia de la condena.

En primer lugar cabe señalar, que luego de realizados los cálculos pertinentes, y dada la reiteración de delitos, el tribunal arribó a la conclusión de que en la especie es más beneficioso para el sentenciado hacer aplicación de la regla establecida en el inciso primero del artículo 351 del Código Procesal Penal, y no aquellas contenidas en el artículo 74 del Código Penal, pues al considerar las penas por separado al conjugar las reglas del artículo 449 del Código Penal, y como tal, las modificatorias presentes y ausentes, el resultado punitivo sería de a lo menos nueve años trescientos días de presidio mayor en su grado mínimo.



Así las cosas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal ya mencionado, teniendo presente que se trata de cuatro delitos y que para la perpetración de cada uno de ellos, se produjo en perjuicio de las víctimas males que superan con creces a los necesarios para cometerlos, es que la pena se aumentará en dos grados, llegando de tal manera al rango de penas del presidio mayor en su grado mínimo, para en definitiva radicar la pena en el quantum que se expondra en la parte resolutive de esta sentencia, en atención a la mayor extensión del mal causado, dado los daños provocados en los inmuebles y vehículo afectados.”

Tercero: Que indica el recurrente que la falta de mención a los medios de prueba en que se da por probado el mayor o menor extensión del mal causado, provoca que la pena se exasperé injustificadamente, imponiendo una pena de 8 años de presidio menor en su grado mínimo.

Sostiene que existe, una clara omisión sobre la forma en como el Tribunal determinó el mayor daño causado, es más el artículo 342 del Código Procesal Penal no sólo impone la obligación de probar los hechos, sino también las circunstancias, lo que en este caso, se omite por completo.

Por otra parte, el deber de fundamentación omitido se encuentra reiterado en el Código Penal, en su artículo 449 N°1, el cual tiene específica aplicación en este caso, por cuanto sostiene:

1º. Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.

Señala que la fundamentación no basta con una mera enunciación, sino que debe producirse un razonamiento claro y metódico sobre como el tribunal entiende probado y llega a tal conclusión.

Finaliza indicando que la causal de nulidad esgrimida ha causado agravio a su representado, por cuanto para llegar a tal cálculo de pena y considerar el mal causado, debieron haber existido medios de prueba para aquello, y al carecer de estos, no se probó tal circunstancia y por ende debió haberse impuesto una pena menor, por tanto, procede que se anule el juicio y la sentencia.



Cuarto: Que en cuanto a la causal alegada, cabe tener presente que luego de la publicación el 5 de julio del año 2016, de la Ley N° 20.931, que Facilita la Aplicación Efectiva de las Penas Establecidas para los Delitos de Robo, Hurto y Receptación y Mejora la Persecución Penal de Dichos Delitos, se agregó al Código Penal el nuevo artículo 449 el cual establece que para efectos de determinar la pena de los delitos mencionados precedentemente no se considerará lo establecido en los artículos 65 a 69 del código punitivo y se aplicarán las siguientes reglas: *1ª Dentro del límite del grado o grados señalados por la ley como pena al delito, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes concurrentes, así como a la mayor o menor extensión del mal causado, fundamentándolo en su sentencia.*

De esta forma, al interior de cada grado previamente establecido por el legislador penal, el tribunal tiene la facultad de determinar cuál es la pena exacta a aplicar, tomando en consideración, el número y entidad de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, y la gravedad del mal causado por el delito. Este proceso valorativo queda entregado a la *discrecionalidad juez*, quien no tiene más pautas legales de actuación en este ámbito que las señaladas.

Así las cosas, la sentencia reclamada en su considerando décimo tercero, indica *“que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal ya mencionado, teniendo presente que se trata cuatro delitos y que para la perpetración de cada uno de ellos, se produjo en perjuicio de las víctimas males que superan con creces a los necesarios para cometerlos, es que la pena se aumentará en dos grados, llegando de tal manera al rango de penas del presidio mayor en su grado mínimo, para en definitiva radicar la pena en el quantum que se expondrá en la parte resolutive de esta sentencia, en atención a la mayor extensión del mal causado, dado los daños provocados en los inmuebles y vehículo afectados.”*

De esta manera, a diferencia de lo señalado por la defensa, la sanción en el quantum de la pena aplicada a Maldonado Seguel, en consideración a la extensión del mal causado, se aplicó en el marco de las facultades conferidas por la ley a los jueces del tribunal oral y en base a los hechos que se tuvieron por acreditados en el considerando sexto del fallo y valorados en



el considerando siguiente, por cuanto los daños provocados en los distintos lugares donde se perpetraron los ilícitos fueron evidentes en cada uno de ellos, quebrando vidrios, vitrinas, candados de la cortina de metal que el local de la Vidriería Visala y en el caso del último delito, rompiendo la malla de alambre que cercaba el lugar y fracturando los vidrios del vehículo Mitsubishi Montero PPU DJSR58.

Quinto: Que de lo que se viene razonando conduce necesariamente al rechazo del recurso interpuesto por la defensa de **MALDONADO SEGUEL**, por cuanto no se configura la causal de nulidad invocada, contenida en el artículo 374 letra e), en relación al artículo 342 letra c) y los principios del artículo 297, todos del Código Procesal Penal; por lo que el recurso en análisis, será desestimado.

Sexto Que por su parte la defensa de **RODRIGO ANDRES QUIROZ CACERES** fundamenta el recurso en que la sentencia recurrida, en su considerando séptimo tuvo por acreditados cuatro hechos que configuran el delito de robo en lugar no habitado previsto y sancionado en el artículo 442 N°1 Código Penal, señalando en cuanto a la participación y grado de ejecución, que correspondió a su representado participación en calidad de autor de conformidad a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, en los hechos singularizados como 1, 2 y 4, encontrándose los dos primeros en grado de consumado y el último en grado de frustrado.

Séptimo: Que la compareciente basa su primera alegación recursiva, sosteniendo que en el considerando Octavo número 2 de la sentencia reclamada se indican los antecedentes tenidos a la vista por el tribunal para dar por establecida la participación de los acusados en los hechos, aduciendo la letrada que la conclusión a la que arribó el tribunal, no se relaciona pacíficamente con la prueba rendida en juicio, lo que es consecuencia de un errado proceso intelectual, vulnerando las reglas de la lógica, en especial el de la razón suficiente, lo que no permite hacer una lectura completa y armónica de la sentencia que permita reproducir y entender el razonamiento utilizado por los jueces, en relación a dar por acreditada la participación de Rodrigo Andrés Quiroz Cáceres en los hechos 1 y 2 .



Agrega que desde los alegatos de apertura la defensa cuestionó la participación de su representado en los hechos signados como 1 y 2 de la acusación fiscal toda vez que se sostuvo, que la prueba de Ministerio Público carecía de la suficiencia para aquello y por consecuencia para un veredicto condenatorio. Distinta alegación se sostuvo sobre el hecho 4 en que no se discutió la participación de don Rodrigo contando incluso con su declaración en estrados en este sentido.

Sostiene que durante el desarrollo del juicio declararon los funcionarios policiales que tomaron los procedimientos correspondientes y las diligencias posteriores, las “víctimas” de las joyerías afectadas y se observaron múltiples imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad de los sitios de suceso, sin embargo, ninguno de estos medios de prueba acreditan de manera alguna la participación de don Rodrigo en estos hechos. No existen testigos presenciales de estos hechos, de los análisis de las imágenes extraídas de los videos de seguridad no se logró reconocer a ningún individuo, de los elementos encontrados en el sitio del suceso respecto del hecho 1, este es un “diablito y un combo” no se obtuvo prueba pericial alguna que lograra informar respecto a la autoría del ilícito o relación con alguno de los imputados, que no se puede relacionar a Quiroz con la posterior compra que efectuó Maldonado acompañado de Gacitúa del combo en Sodimac, tampoco se le puede vincular con el delito posterior, atendida la detención en la comuna de San Carlos de Maldonado, Muñoz y Gacitúa el 26 de agosto de 2018 portando elementos idóneos para un robo, ni de las escuchas telefónicas sobre el teléfono móvil de Gacitúa y su madre Silvia Guerrero relacionar al sujeto “NN” con Quiroz y finalmente sostiene que no le puede perjudicar la declaración del coimputado Wilson Gacitúa Guerrero, por cuanto la defensa en todo momento cuestionó la conclusión a que arribaron los funcionarios policiales y que hizo suya el tribunal, en orden a que la persona denominada “Poca” se trataba de su representado en la Brigada de Robos el 27 de diciembre de 2018, siendo acomodaticia a este respecto.

Octavo: Que en un segundo acápite del recurso, reclama igualmente la defensa de **RODRIGO QUIROZ CÁCERES** la contravención al principio de la lógica, específicamente referido a la razón suficiente en



relación a la cuantía de la pena, en relación al menor o mayor extensión del mal causado.

Sobre el punto se indica en la sentencia en el considerando décimo tercero, en relación a la penalidad que *“Respecto de Rodrigo Andrés Quiroz Caíces. Con relación a este sentenciado, dable es recordar que resulto condenado como autor de dos delitos de robo en lugar no habitado en grado de consumado y como autor de un delito de robo en lugar no habitado en grado de frustrado, sin que existan modificatorias a considerar a su respecto.*

Al igual que en el caso anterior, dada la pluralidad de delitos de la misma especie, luego de realizadas las operaciones pertinentes, se determina que le es más ventajoso aplicar la norma del artículo 351 inciso primero del Código Procesal Penal, y no el artículo 74 del Código Penal, pues en caso de hacer aplicación de este último la pena a imponer de seis años sesenta y tres días de presidio mayor en su grado mínimo.

En concordancia con lo anterior, empleando el ya referido artículo 351 del Código Procesal Penal, y teniendo presente que el enjuiciado no cuenta con atenuantes ni agravante, y la circunstancia de haber sido acusado y condenado solo por tres delitos uno de los cuales se encuentra en grado de frustrado, la pena se aumentará en un grado, por lo tanto ésta se encuentra en el tramo de presidio menor en su grado máximo, la que se impondrá en la cuantía se señalará en lo resolutive de este fallo, en atención a la mayor extensión del mal causado, dado los daños provocados en los inmuebles y vehículo afectados” condenándose en definitiva a su representado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo.

Sostiene que si bien no discute respecto al grado de la pena impuesta, si reclama la cuantía finalmente aplicada y justamente respecto a la consideración de la “atención a la mayor extensión del mal causado” la defensa disiente del tribunal en cuanto a su fundamentación, toda vez que al respecto no encontraron alcance alguno que justifique la decisión respecto a la pena finalmente aplicada, como se evidencio previamente, al hacer alusión a los hechos que se tuvieron por probados, nada se indicó respecto a evaluaciones o detalles de perjuicios por lo que no se comprende que circunstancias se tuvo a la vista para aplicar la pena definitiva.



Por otra parte, el deber de fundamentación omitido se encuentra de manera reiterado en el Código Penal, en su artículo 449 N°1, el cual tiene específica aplicación en este caso.

Noveno: Que, en primer término, en cuanto a la **participación** del acusado **RODRIGO QUIROZ CÁCERES** en los delitos perpetrados los días 13 y 16 de agosto de 2018, se dirá que el estándar que se exige para condenar a un acusado, conforme a lo establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, supone que el sentenciador haya llegado a una convicción más allá de toda duda razonable, en el sentido que se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable penada por la ley.

Cabe tener presente, que los artículos 296 y 340 inciso 2° del Código Procesal Penal determinan respectivamente: "La prueba que hubiera de servir de base a la sentencia deberá rendirse durante la audiencia del juicio oral..." y "El Tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral". Como corolario de lo anterior, el Tribunal está facultado para hacer la apreciación conjunta de la prueba y conceder credibilidad a unas u otras declaraciones en todo o en parte, pudiendo tomar datos de todas las manifestaciones prestadas según su personal criterio y valoración, conforme al principio de la libre valoración establecido en el artículo 297 del cuerpo legal antes citado.

Así la exigencia que el legislador le impone al sentenciador determina que éste, para formar su convicción debe hacerlo en base a la prueba rendida en juicio oral. Por su parte, el artículo 297 del Código Procesal Penal, si bien le otorga libertad para valorar la prueba rendida, le establece como límite que no puede contradecir los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

En concordancia con lo anterior, la letra c) del artículo 342 del Código ya citado, determina que uno de los requisitos que debe contener la sentencia, es la exposición clara, lógica, y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos favorables o desfavorables para el acusado y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, todo ello en concordancia con el artículo 297 del mismo cuerpo de leyes.



Décimo: Que, el control que esta Corte puede hacer sobre la prueba sólo cabe si la valoración efectuada por el Tribunal Oral ha sido notoriamente irracional o arbitraria, en lo que no se ha incurrido. Por el contrario, del análisis de los antecedentes se desprende que junto con respetar la regularidad formal del procedimiento, se hizo una apreciación racional de la prueba para llegar a las conclusiones consignadas en el fallo.

Décimo Primero: Que en efecto, de la lectura del fallo impugnado, especialmente, de los motivos séptimo y siguientes, aparece que las sentenciadoras han cumplido ampliamente con la exigencia legal, pues se hizo cargo de toda la prueba rendida, valorando correctamente los medios de prueba allegados a la audiencia de juicio y aplicando los principios que informan el sistema de la sana crítica, esto es, con libertad pero sin contravenir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, dando por establecido, es síntesis, en el considerando 8.2 respecto de la participación de Rodrigo Quiroz Cáceres en los delitos N° 1 y 2, referidos en el considerando séptimo, que durante el desarrollo del juicio oral, en particular de las declaraciones de los testigos funcionarios de la Policía de Investigaciones, pertenecientes a Brigada de Robos de la ciudad de Chillán, se pudo establecer que en la perpetración de los delitos de robo signados con los números 1, 2 y 3, se empleó una herramienta conocida como combo, y en la comisión de los hechos 3 y 4, se empleó como medio de transporte de los agentes una camioneta marca Mitsubishi, modelo L200 de color rojo, ambos instrumentos se encuentran vinculados y permitieron al tribunal determinar la participación de los enjuiciados Jesús Antonio Maldonado Seguel y Rodrigo Andrés Quiroz Cáceres. Agregando con posterioridad que según manifestaron los testigos Astroza Bizama y Venegas Vega, luego de cometido el delito de robo en lugar no habitado del día 13 de agosto de 2018, los hechores dejaron abandonados los instrumentos del delito, a saber un combo o mazo y un diablito, para posteriormente el día 16 de agosto de 2018, en la misma galería Concepción, se perpetró un segundo robo en lugar no habitado en la Joyería Río Cato, donde los autores también emplearon un combo, lo que derivó en que personal policial procediera a empadronar las ferreterías de la ciudad de Chillán, averiguando que el día



15 de agosto de 2018 este producto había sido vendido a Jesús Antonio Maldonado Seguel, acompañado de Wilson Gacitúa Guerrero. Así el día 22 de agosto de 2018 acontece el robo en la vidriería Visala, delito que se verifica con la intervención de tres individuos, golpeando con un combo el vidrio de seguridad que guarecía el comercio, interviniendo también un tercer individuo que los trasladaba en una camioneta Mitsubishi modelo L200. Los policías Zamorano Fredes, Astroza Bizama y Venegas Vega, que en el transcurso de la investigación, tomaron conocimiento que el 26 de agosto de 2018 en la comuna de San Carlos, en un procedimiento llevado a cabo por personal de carabineros, Jesús Antonio Maldonado Seguel, Rodrigo Andrés Quiroz Cáceres y Wilson Gacitúa Guerrero, fueron aprehendidos por portar elementos idóneos para cometer el delito de robo, entre ellos un combo, y además la policía tomó conocimiento que en dicha oportunidad estos sujetos se movilizaban en una camioneta de color rojo, marca Mitsubishi modelo L200, similar a la que habían visto en la vidriería Visala. Seguidamente y continuando con la investigación dada la similitud existente entre los ilícitos y la existencia de elementos en común, previa autorización judicial, se intervino el teléfono de Wilson Gacitúa Guerrero y de su madre Silvia Guerrero, escuchas que comenzaron el 26 de septiembre de 2018, verbalizando el testigo Gastón Cancino López, las transcripciones de las escuchas del día 21 de octubre de 2018, además de reconocer y dar explicación de los respectivos audios, las cuales dan cuenta que el 21 de octubre de 2018 Wilson Gacitúa Guerrero conversa con sujeto hasta entonces un “NN”, con quien se coordina para ir a cometer un delito (“un trabajo”), pero requerían ubicar a “Jesús”, persona a quien Wilson Gacitúa Guerrero logra contactar. Con posterioridad se tomó conocimiento del robo perpetrado en la empresa minera ubicada en la Ruta 5 Sur el día 22 de octubre de 2018 en horas de la madrugada, delito en que los hechores se trasladaron en una camioneta marca Mitsubishi, modelo L200, de color rojo, placa patente DJSR58, la que coincidía con la se había empleado en la perpetración del robo en la vidriería Visala, enterándose además que había una persona detenida, quien resultó ser Rodrigo Andrés Quiroz Cáceres. Añaden que los dichos de Wilson Gacitúa Guerrero en calidad de imputado, ante personal de la Brigada de Robos el día 27 de diciembre de



2018, reconoce haber participado en los cuatro delitos, explicando que su participación consistía en trasladar a sus compañeros de delito “Nasa” y “Poca”, en los hechos 1 y 2 en un vehículo Chevrolet Spark, y en los hechos 3 y 4, en la camioneta Mitsubishi modelo L200 de color rojo, perteneciente a la pareja de su madre. Para dilucidar a quien se refería como “Nasa” y “Poca”, resulta de suyo relevante señalar que si bien Gacitúa Guerrero dijo que “Poca” se llamaba Christopher, pues así lo contestó el testigo Zamorano Fredes en el contraexamen, no es menos cierto que este mismo testigo al reproducir la declaración de Gacitúa, manifestó que este último señaló, mientras se refería al hecho 4, que los carabineros habían detenido al “Poca”, y considerando que el único detenido en dicho suceso fue Rodrigo Andrés Quiroz Cáceres, no queda más que concluir que el sujeto denominado “Poca” es el sentenciado Quiroz.

Décimo Segundo: Que, del recurso de nulidad interpuesto por la defensa, aparece que lo impugnado en relación a los hechos establecidos y la participación atribuida al acusado Rodrigo Quiroz Cáceres en los delitos de robo en lugar no habitado, referidos en los numerales 1 y 2 del considerando séptimo del fallo recurrido, no es un problema de falta de fundamentos, sino que de la apreciación de la prueba, lo que constituye una facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, sin que los jueces avocados a resolver la impugnación de la sentencia, mediante el presente recurso de nulidad, estén facultados para revisar las cuestiones de hecho referidas a la apreciación de la prueba, puesto que, como lo establece la ley, es el juez del tribunal indicado, el único que debe justipreciar la prueba, sin que la Corte pueda cumplir tal cometido

Respecto de las alegaciones de la defensa sobre las cuales estructura el arbitrio de nulidad, conviene precisar que el coherente y estructurado desarrollo argumentativo plasmado en el fallo de primer grado, permite desestimar las inconsistencias denunciadas por el recurrente, toda vez que ellas están construidas en base a fragmentos de los fundamentos de las magistradas, omitiendo el certero hilo conductor seguido para establecer los hechos y atribuir inequívocamente participación al acusado, en los hechos acaecidos el 13 y 16 de agosto de 2018, respectivamente.



En tal contexto, la decisión de condena se basa en la extensa prueba de cargo rendida en el curso del juicio oral, a saber, con la prueba testimonial en su totalidad, con parte de las fotografías incorporadas como otros medios de prueba, así como con la prueba material también incorporada al juicio, las cuales permiten una construcción justificable y motivada en los razonamientos efectuados en la sentencia, que cumple el estándar de *más allá de toda duda razonable*, y los principios contenidos en el artículo 297 del Código Procesal Penal, expresando con claridad cómo y por qué arribó a una determinada conclusión.

Décimo Tercero: Que, finalmente en cuanto al segundo motivo de la reclamación de la defensa de **RODRIGO QUIROZ CÁCERES** la contravención al principio de la lógica, específicamente referido a la razón suficiente en relación a la **cuantía de la pena** en relación al menor o mayor extensión del mal causado, dado los daños provocados en los inmuebles y al vehículo afectado, condenándose en definitiva a su representado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, la defensa disiente en cuanto a su fundamentación, toda vez que nada se indicó respecto a evaluaciones o detalles de perjuicios, omisión que se encuentra reiterada en el Código Penal, en su artículo 449 N°1, el cual tiene específica aplicación en este caso.

De esta manera, tal como se señaló respecto del encartado Jesús Maldonado Seguel, después de la publicación el 5 de julio del año 2016, de la Ley N° 20.931, al aplicar el artículo 449 N°1 al interior de cada grado previamente establecido por el legislador penal, el tribunal tiene la facultad de determinar cuál es la pena exacta a aplicar, tomando en consideración, el número y entidad de las circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal, y la gravedad del mal causado por el delito. Este proceso valorativo queda entregado a la *discrecionalidad juez*, quien no tiene más pautas legales de actuación en este ámbito que las señaladas.

Así las cosas, la sentencia reclamada en su considerando décimo tercero, indica que “*de conformidad a lo ya referido artículo 351 del Código Procesal Penal, y teniendo presente que el enjuiciado no cuenta con atenuantes ni agravante, y la circunstancia de haber sido acusado y condenado solo por tres delitos uno de los cuales se encuentra en grado de*



frustrado, la pena se aumentará en un grado, por lo tanto ésta se encuentra en el tramo de presidio menor en su grado máximo, la que se impondrá en la cuantía se señalará en lo resolutive de este fallo, en atención a la mayor extensión del mal causado, dado los daños provocados en los inmuebles y vehículo afectados”.

En consecuencia, a diferencia de lo señalado por la defensa, la sanción en el quantum de la pena aplicada a Quiroz Cáceres, en consideración especialmente a la extensión del mal causado, se tuvo por acreditado con las diferentes probanzas adjuntadas al juicio oral reseñadas en el considerando sexto del fallo y valoradas en el considerando siguiente, por cuanto los daños provocados en los distintos lugares donde se perpetraron los ilícitos fueron evidentes en cada uno de ellos, quebrando vidrios, vitrinas y en el caso del último delito, rompiendo la malla de alambre que cercaba el lugar y fracturando los vidrios del vehículo Mitsubishi Montero PPU DJSR58.

Décimo Cuarto: Que en cuanto a los enunciados fácticos que se denuncian como infringidos por la defensa de Quiroz Cáceres en relación al principio de la razón suficiente, se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia que es la regla de la sana crítica frecuentemente invocada como conculcada en el establecimiento de los hechos, y con la misma frecuencia es desestimada por considerar que se trata de una mera discrepancia en la valoración de la prueba entre el tribunal y el recurrente, en base a la cual se fijaron los hechos ya establecidos, conforme a los cuales calificó la participación del encartado en los mismos y las facultades de los jueces de grado para considerar como elemento de determinación del quantum de la pena dentro del grado, razones que llevaron a desestimar la tesis propuesta por la defensa.

En efecto, el presente recurso, no es la excepción a lo formulado en el párrafo anterior, por cuanto el recurrente lo que destaca son ciertas contradicciones o insuficiencias que surgirían de un análisis individual de las probanzas, la falta o incompleta valoración de la prueba, la omisión de análisis de todos los argumentos de la defensa, pero esos reclamos sobre la apreciación, más propios de un recurso de apelación, carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad como la intentada.



Décimo Quinto: Que por todo lo razonado, se concluye que el Tribunal Oral en lo Penal ha respetado las reglas del artículo 342 letra c) y los principios que el artículo 297, ambos del Código Procesal Penal, le exigen; por lo que los recursos en análisis serán desestimados, respecto de ambos condenados.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 297, 342 letra c), 372, 374 letra e), 378, 383 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZAN, sin costas**, los recursos de nulidad interpuestos por los Defensores Penales Públicos, en representación de sus representados **JESUS ANTONIO MALDONADO SEGUEL, y RODRIGO ANDRES QUIROZ CACERES**, respectivamente, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha treinta y uno de agosto de 2021 por la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, integrada por las Juezas Titulares doña Olga Fuentes Ponce, y doña María Paz González González, declarándose que ella no es nula, como tampoco lo es el juicio oral.

Regístrese y comuníquese lo resuelto.

Redacción de la Ministra Interina doña Roxana Salgado Salamé.

No firma el Ministro señor Arcos Salinas, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente haciendo uso de feriado legal.

R.I.C. 324 - 2021.- PENAL





NTRCKYZDXV

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por los Ministros (as) Paulina Gallardo G., Berta Roxana Salgado S. Chillan, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno.

En Chillan, a veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.